

**PROCEDIMIENTO DE  
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  
NÚMERO: 60/2008.**

**SERVIDORA PÚBLICA:**

\*\*\*\*\*

México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil once.

**VISTOS;** para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **60/2008;** y,

**R E S U L T A N D O:**

**PRIMERO. Denuncia.** Mediante oficio DGRARP/DRP/1736/2008 de ocho de septiembre de dos mil ocho, el Director de Registro Patrimonial informó a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, que la servidora pública **\*\*\*\*\***, Asesora adscrita a la entonces Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal, estaba obligada a presentar declaración de modificación patrimonial en el encargo en mayo de dos mil ocho; sin embargo, dicha declaración fue recibida **extemporáneamente** el veintinueve de agosto de dos mil ocho, por tanto en proveído de nueve de septiembre de dos mil ocho se ordenó la apertura del cuaderno de investigación **C.I. 60/2008.**

**SEGUNDO. Procedimiento.** Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil once, el Contralor de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa **60/2008** en contra de la persona señalada, por estimar la existencia de elementos suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 8, fracción XV, en relación con el 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en relación a los artículos 50, fracción XIX, y 51, fracción III, del Acuerdo número 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se ordenó requerir a la citada servidora pública a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe relativo y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto de seis de junio de dos mil once, el Contralor tuvo por rendido en tiempo y forma el informe requerido a dicha servidora pública, y por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que al efecto ofreció; por diverso auto de dieciséis de junio de dos mil once, declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del citado Acuerdo General Plenario; por diverso acuerdo de diecisiete de junio del mismo año se emitió el dictamen respectivo.

## **C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. Competencia.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005, en tanto se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

**SEGUNDO. Marco normativo.** Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo Plenario 9/2005, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en dicho acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

**TERCERO. Análisis de la conducta atribuida a la servidora pública.** Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta administrativa que se atribuye a la servidora de mérito es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 8,

fracción XV, en relación con el 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en relación a los artículos 50, fracción XIX, y 51, fracción III, del Acuerdo Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal, de presentar la declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo.

De las constancias que obran en autos, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II, 129, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que:

A. \*\*\*\*\* ingresó a laborar a este Alto Tribunal el primero de marzo de mil novecientos ochenta y siete, y en la fecha en que ocurrieron los hechos se le otorgó un nombramiento por tiempo fijo, como Asesora de Mando Superior, puesto de confianza, del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, adscrita en ese periodo a la Coordinación de Asesores de la Presidencia (copia certificada visible a foja 23 del expediente principal), por lo que la servidora pública de mérito tenía la obligación de presentar declaración de modificación patrimonial en mayo de dos mil ocho (foja 1 del expediente principal), fecha en la que se encontraba adscrita a la entonces Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; sin embargo, de acuerdo con la copia certificada del acuse que la Dirección de Registro Patrimonial expidió con motivo de la recepción de dicha declaración se desprende que lo hizo hasta el veintinueve de agosto de dos mil ocho.

B. \*\*\*\*\* esgrimió en su escrito de defensa tres argumentos principales:

1. Solicita que al emitir la resolución se considere la excepción prevista en el artículo 17 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2. Refiere que aunque dicha disposición no estaba vigente al momento de los hechos, se aplique en su beneficio en aras del principio “*in dubio pro reo*”.
3. Manifiesta en su defensa que presentó la declaración de modificación patrimonial, dentro del período de un año, que no medió requerimiento para ello y que la conducta atribuible no es grave.

Respecto de la **primera** de sus defensas debe precisarse que el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala:

**“Artículo 17 Bis.-** La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

*Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en*

*la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.”*

Al respecto conviene mencionar que la adición del artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve.

En el presente caso procede destacar el vocablo “podrán” que se contiene en el citado artículo 17 bis, del cual se desprende una facultad discrecional para quién impone una sanción administrativa. Tratándose de declaraciones patrimoniales anuales presentadas en forma extemporánea, es determinación del **suscrito** sancionar en todos los casos, salvo justificación probada y razonable, porque es un hecho público que la Contraloría de este Alto Tribunal lleva a cabo una campaña para fomentar el debido cumplimiento de la obligación. No existe pues motivo para ejercer una atribución discrecional, ante un claro evento de inobservancia legal, máxime que no se señala motivo alguno que lo hubiese provocado o que justifique que a la servidora se le dé un trato diverso al resto de los servidores que han incurrido en la misma falta.

Por lo que hace a la **segunda** de las defensas, respecto de la cual expone la servidora pública que en la época en que se suscitaron los hechos que se le atribuyen, esto es, en dos

mil ocho, el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no estaba vigente, pero que en atención al principio general de derecho "*In dubio pro reo*", solicita sea aplicado en su beneficio, resulta inatendible porque en la especie no se ejercitará la facultad discrecional que se contiene en el citado precepto.

Por cuanto a la **tercera** defensa, \*\*\*\*\* refiere que su declaración la presentó de manera voluntaria, sin que tuviera que mediar algún requerimiento de autoridad y, por tanto, se permitió a la Contraloría conocer y fiscalizar su situación patrimonial; además, que la presentó dentro de un año contado a partir del día siguiente, al en que feneció el término para cumplir con su obligación, y que la conducta que se le imputa no está considerada como grave, conforme al artículo 13 de la ley de la materia.

Debe señalarse que la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial, como la de modificación, no deriva de requerimientos que haga la Contraloría, sino del marco legal aplicable a todos los servidores públicos de este Alto Tribunal a quienes otorgue nombramiento en algún puesto de los que dispone el artículo 36, fracción XI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el 50 del Acuerdo Plenario 9/2005, lo cual debe realizarse con las características de oportunidad y veracidad de conformidad con el artículo 8, fracción XV, en relación con el numeral 37, fracción III, ambos de la Ley Federal citada, de ahí que el hecho de que haya presentado de forma voluntaria la

declaración de modificación patrimonial del ejercicio dos mil siete, en nada cambia la situación de que lo hizo fuera del plazo legalmente previsto, en el mes de mayo de dos mil ocho.

Luego, por lo que hace al hecho de que la presentó dentro de un año contado a partir del día siguiente al en que feneció el término para cumplir con su obligación, tampoco puede considerarse como una excluyente de responsabilidad, o como una justificación de su actuar, dado que respecto de las declaraciones de modificación patrimonial, los artículos 37, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 51, fracción III, del Acuerdo Plenario 9/2005, establecen claramente, que será durante el mes de mayo de cada año en que deba cumplirse con esa obligación; además, de las constancias de autos no se advierte que \*\*\*\*\* se ubicara dentro de las excepciones que la parte final del artículo 51, fracción III, plantea, esto es, que hubiese presentado la declaración de inicio o conclusión durante ese periodo.

Enseguida, respecto de que la infracción que cometió no está considerada como grave, debe señalarse que es una circunstancia que se valorará al momento de dictaminar la sanción correspondiente, por lo que no puede ser considerada como excluyente de responsabilidad sino de individualización de la sanción.

Ahora bien, en relación con los argumentos concernientes a la aclaración de sentencia emitida por la



Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el procedimiento de responsabilidad administrativa radicado bajo el número TEPJF-CI-PA-001/2008, se tiene presente que en acuerdo de diez de marzo de dos mil once, que obra en autos, se tuvieron por recibidas las copias certificadas del oficio TEPJF/CI/276/2011 y de la resolución emitida en aquel procedimiento, cuyo primer resolutivo fue:

*“**PRIMERO.** En el procedimiento de responsabilidades administrativas TEPJF-CI-PA-001/2008, se determina que la **C. \*\*\*\*\*** no es administrativamente responsable, con base en lo dispuesto en el acuerdo 95BIS/S4(21-V-20101) relativo a la presentación extemporánea de la declaración de situación patrimonial, que establece se proceda en términos del artículo 17 bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por tratarse de un asunto similar.”*

En atención a lo expuesto antes, se hace constar, como hecho notorio de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el expediente Varios de Servidores Públicos Sancionados/2011, el ocho de marzo de dos mil once se acordó hacer la anotación correspondiente sobre la sanción que se había impuesto a \*\*\*\*\* en el expediente resuelto por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF-CI-PA-001/2008; sin embargo, se advierte que en el registro de servidores públicos sancionados que se lleva en la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas, se anotó que al resolverse la aclaración de sentencia promovida por dicha servidora pública en el citado expediente, aquél órgano

colegiado determinó que no era responsable, con fundamento en el acuerdo 95 BIS/S4 (21-IV-2010).

No obstante, las manifestaciones relativas a que se revocó la sanción que se le había impuesto en el Tribunal Electoral, se valorarán en el apartado de reincidencia en la que pudo incurrir \*\*\*\*\*, durante la individualización de la sanción, por lo que, en sí mismas, no constituyen justificación alguna en este expediente.

En consecuencia de lo expuesto, ya que los argumentos y pruebas que expuso \*\*\*\*\* en el informe de defensas no desvirtúan la infracción que se le atribuye en este procedimiento, ni justifican su responsabilidad, deberá determinarse la sanción a imponer.

C. Del informe que \*\*\*\*\* que presentó el veintisiete de enero dos mil once, que obra en constancias (foja 858 a 861 del expediente principal), destaca que manifestó lo siguiente:

*“3. Es cierto que el veintinueve de agosto de dos mil ocho, presenté ante la Dirección de Registro Patrimonial mi declaración de modificación patrimonial del ejercicio dos mil siete”.*

Ello evidencia que dicha presentación fue extemporánea, dado que se trata de una confesión expresa.

En tal orden de ideas, existen elementos suficientes para tener por demostrado que la servidora pública incumplió con la obligación de presentar en tiempo su declaración de modificación patrimonial, conducta que encuadra en el

supuesto de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8, fracción XV, en relación con el 37, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 50, fracción XIX, y 51, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal.

**CUARTO. Sanción.** Al quedar demostrada la infracción administrativa atribuida a \*\*\*\*\* se procede a individualizar la sanción que le corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

**a) Gravedad de la sanción.** La conducta atribuida a la infractora no está tipificada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio.** De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal de la infractora que obran en autos, se advierte que ingresó a laborar en este Alto Tribunal el primero de marzo de mil novecientos ochenta y

siete, y que en la época en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen ocupaba el cargo de Asesora de Mando Superior.

**c) Condiciones exteriores y los medios de ejecución.** De las constancias que obran en autos, se advierte que la infractora no presentó su declaración de modificación patrimonial dentro del plazo previsto en la ley; sin embargo, se infiere que la presentación extemporánea en que incurrió no tuvo la intención de evadir la fiscalización de su patrimonio en atención a que finalmente sí la presentó.

**d) Reincidencia.** Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que \*\*\*\*\* lo haya sido previamente con motivo de alguna falta administrativa.

**e) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.** En la especie no existe prueba de que la infractora hubiese obtenido algún beneficio o lucro indebido, o hubiera ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió, máxime que la falta es estrictamente formal, por incumplir con un deber.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de presentar su

declaración de modificación patrimonial, así como a la conducta procesal observada por la infractora durante el desarrollo de este procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, 133, fracción II, 135, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción I, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, esta Presidencia estima que se debe imponer a la infractora la sanción de **Apercibimiento Privado**, que se ejecutará por el Contralor de este Alto Tribunal en términos de lo establecido en el citado Acuerdo.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de \*\*\*\*\*.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**PRIMERO.** \*\*\*\*\* incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

**SEGUNDO.** Se impone a \*\*\*\*\* la sanción de **Apercibimiento Privado**.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Doctor Fernando Altamirano Jiménez, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 60/2008 instaurado en contra de \*\*\*\*\* . Conste.

JGCR/jht.

***“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.***